

Un Plan que contradice la Paz**12 Abril, 2015****Categoría: Artículos****Escrito por Alirio Córdoba, Guerrillero del Bloque Martín Caballero de las FARC-EP**

El Plan Nacional de Desarrollo que actualmente impulsa el gobierno de Juan Manuel Santos, por encima de tantas voces y manifestaciones de rechazo surgidas desde los más diversos sectores de la población, es otra muestra de su poca voluntad de paz con justicia social. Este plan, aprobado a pupitrazos por sus mayorías parlamentarias, significa la profundización del proyecto neoliberal diseñado para favorecer a los grandes inversionistas a costa del bienestar de la Colombia humilde y expoliada.

Bajo el nombre de proyectos de interés nacional y estratégico, unas nuevas locomotoras vienen a terminar las tareas encomendadas a Santos por Uribe, simbolizadas en los tres huevitos; y para garantizar que no encontrarán obstáculos a su paso (la llamada “confianza inversionista”), los eleva al rango de “Proyectos de Utilidad Pública e Interés Social”. Nada más alejado de la realidad, porque son precisamente las comunidades y la nación quienes menos beneficios obtendrán de estos, y en cambio serán las víctimas directas de la destrucción del territorio, el ambiente y la vida.

Esa categoría de “utilidad pública e interés social” que se le otorga a los megaproyectos en el nuevo plan, nos lleva a pensar que se avecina un nuevo periodo de despojo violento de tierras, amenazas a líderes campesinos y desapariciones, relacionadas con nuevas y viejas modalidades de acaparamiento, cuyo efecto inmediato es el desplazamiento forzado de familias campesinas y pueblos enteros, como viene ocurriendo en los departamentos del Cesar y La Guajira con las carboneras Cerrejón y Drummond, o en el Meta con la petrolera Pacific Rubiales, por mencionar solo unos casos. Un impacto semejante se produce en el sector de los agro-combustibles, especialmente con la palma aceitera, en Cesar, Magdalena y Bolívar.

Preocupa e indigna, la subordinación de este gobierno al capital financiero transnacional, al que le ofrece sin condiciones toda clase de gabelas, eximiéndolo de obligaciones ambientales, sociales y tributarias, en detrimento de nuestra soberanía patria.

Extranjerización, tema pendiente en la mesa.

En las acaloradas discusiones entre los delegados de las Farc y los del gobierno en la mesa de diálogos, con relación al primer punto de la agenda referido a “Política de desarrollo agrario integral con enfoque territorial”, no se pudo arrancar al gobierno el compromiso de poner freno a su política de extranjerización de la tierra y el territorio de Colombia; ese tema está pendiente en el refrigerador, a la espera de que la fuerza del pueblo volcada en las calles, plazas y caminos, obligue al gobierno de Juan Manuel Santos a despegar las rodillas de la tierra y dar un viraje en sus planes de entrega del territorio a las multinacionales.

En varios intentos, algunos “exitosos” y otros fallidos, el gobierno ha buscado entregarle la altillanura a empresarios nacionales y empresas multinacionales. El proyecto de ley 133 de 2014 y ahora el plan nacional de desarrollo, demuestran que Santos y la clase que él representa, no escatiman esfuerzos a la hora de cumplir sus compromisos con el capital financiero internacional. Por ejemplo, bajo la figura jurídica del arrendamiento, el Estado

colombiano le entrega plena libertad a las grandes empresas para que exploten las tierras baldías con las que pudiera resolver la demanda de los sectores campesinos, despojados y desplazados de todos los gobiernos. Esa actitud es contraria a la mezquindad que mostraron en la mesa de diálogos ante la propuesta de la insurgencia de conformar un fondo de tierras de 20 millones de hectáreas.

Desde nuestro compromiso fariano, ligado profundamente a la causa de los más humildes de Colombia, de los excluidos de la patria, la tierra y el pan, elevamos un llamamiento a la cordura, a la sensatez, que conduzca a poner freno a la entrega de las riquezas nacionales y de nuestros territorios al capital privado y extranjero, es decir, que pare la locura neoliberal, la vorágine imperialista, porque pone en riesgo los avances de la mesa de diálogos y la posibilidad de la paz con justicia social.

Indiscutiblemente, el Plan Nacional de desarrollo que viene imponiéndole el gobierno Santos a las mayorías nacionales es un campo minado contra las esperanzas de paz con justicia social de los colombianos. Sólo la movilización popular podrá contener las locomotoras santistas, rebautizadas ahora como proyectos de interés nacional y estratégico.